U81-1



# HAY QUE ENJUICIAR AL GENERAL PINOCHET

**Miguel GARAY MARTINEZ**

"Un jefe de Gobierno tiene que hacerse responsable de lo que sucede bajo su administración".

Así respondió el Arzobispo de Santiago, Monseñor **Carlos Oviedo** al ser consultado por la responsabilidad de **Pinochet** en los numerosos crímenes cometidos durante la dictadura y que hoy empiezan a quedar al descubierto.

La respuesta del acorralado capitán general no se dejó esperar. Recurriendo a su socorrida táctica de "arrancar para adelante" lanzó inequívocas "señales" al Gobierno y al país entero. La primera tuvo lugar en Arica, en la ceremonia cívico militar de conmemoración del asalto y toma del Morro de Arica. Al acto no asistió el ex dictador, participando en cambio en una celebración organizada exclusivamente por el Ejército. El Intendente regional, **Nelson Garrido**, máxima autoridad de la zona y jefe del Gobierno regional, fue desplazado en el orden protocolar. Pasando por sobre la autoridad civil, la revista de las tropas y la autorización para el desfile de las fuerzas las hizo el mayor general **Patricio Serre**, nombrado comandante en jefe del recién formado Primer Cuerpo del Ejército. Los jefes militares no autorizaron la lectura de un saludo enviado especialmente por el Presidente **Patricio Aylwin**.

La otra "señal" de Pinochet tuvo lugar en San Bernardo, en la ceremonia de conmemoración del Día del Arma de la Infantería. Al acto fue especialmente invitado el general (R) **Carlos Forestier**, máximo jefe militar en Iquique al momento del asesinato de varios prisioneros en el campo de concentración de Pisagua. Forestier salió acompañado del brigadier general (J) **Fernando Torres Silva**, auditor general del Ejército, tristemente célebre Fiscal Militar, y uno de los hombres claves del "gabinete" que asesora al comandante en jefe de la institución. El mensaje es simple: Pinochet no abandona a sus hombres.

### Clave de la transición

Los hallazgos de nuevas osamentas de detenidos desaparecidos, especialmente en Pisagua y la negociación parlamentaria tendiente a imponer una "amnistía encubierta" que favorece a los autores de torturas y crímenes cometidos por los organismos represivos, demuestra que los derechos humanos son un factor clave de la transición.

Se trata de un asunto decisivo que pone a prueba los compromisos asumidos por la Concertación ante todos los chilenos durante la campaña electoral. Es preocupante y motivo de desilusión que parlamentarios elegidos por el voto popular asuman compromisos a espaldas del pueblo para beneficiar a los asesinos que tanto daño causaron al país entero.

Los abogados de presos políticos señalaron enfáticamente que "la propuesta de rebajar en dos grados las penas de los graves delitos de Derechos Humanos cometidos por agentes del Estado con anterioridad al 11 de marzo de 1990, es una amnistía encubierta que se agrega a la autoamnistía del decreto ley 2191 de 1978 que extinguió la responsabilidad penal en delitos tan atroces como los secuestros y homicidios perpetrados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Las actuales osamentas encontradas en Pisagua dan cuenta de estos delitos".

Para hacerse una idea de los resultados de la negociación entre parlamentarios de la derecha y la Concertación señalemos, a modo de ejemplo, que la aplicación de tormentos o torturas con resultado de muerte se rebaja a CUARENTA días de prisión, quedando, por lo tanto, entre los delitos que no serían investigados.

### Preocupación de Aylwin

Los chilenos tienen grandes esperanzas en el Gobierno que encabeza el Presidente Patricio Aylwin, quien estaría preocupado por el acuerdo alcanzado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El primer mandatario ha reiterado antes y después de ser elegido, su firme voluntad de avanzar en el establecimiento de la verdad y la justicia. Pero es indudable que si los parlamentarios democráticos ceden al chantaje de la derecha se dificulta la labor presidencial. Las declaraciones del diputado **Andrés Aylwin**, mostrando su disconformidad con el acuerdo alcanzado en el Congreso, sería un primer gesto de la disconformidad del propio Presidente.

Los hallazgos de cementerios clandestinos con los cuerpos de víctimas de la represión dictatorial, empiezan a descubrir la verdad para millones de chilenos que jamás imaginaron la dimensión de los crímenes cometidos por el régimen de Pinochet. Es una verdad que asusta a la derecha. La derecha justificó y alentó la represión contra el pueblo; guardó silencio y se hizo cómplice de todas las violaciones a los derechos humanos que hoy empiezan a sacudir la conciencia de la gente.

Por eso es que la derecha se empeña a fondo para usar la liberación de los presos políticos a cambio de la impunidad, logrando acuerdos cupulares tendientes a impedir que Chile siga conociendo la verdad y que se haga justicia.

Contrasta con la actitud vacilante de la mayoría de los parlamentarios democráticos, la actitud resuelta y consecuente de diputados como **Jaime Naranjo**, **Sergio Aguiló**, **Juan Pablo Letelier** y **Camilo Escalona**, quienes basados en las promesas hechas antes de ser elegidos mantienen su postura de alcanzar la verdad y hacer justicia.

En esta misma dirección se pronunció el subsecretario general del Partido Socialista, **Marcelo Shilling**, quien dijo que como cuestión de principios, las leyes en tramitación no pueden orientarse a avalar la impunidad de los delitos cometidos por la dictadura de Pinochet.

Los testimonios gráficos remecen la conciencia de la gente. Son hombres y mujeres que murieron en defensa de la democracia, que soñaron y lucharon por los nobles ideales de la izquierda impulsados sin vacilación por el Presidente **Salvador Allende**. Esos muertos interpelan hoy a esa izquierda, a sus dirigentes y partidos, junto a quienes lucharon. La mejor forma de honrar la memoria de los caídos es alcanzando la verdad y la justicia, comenzando por enjuiciar al propio Pinochet, principal responsable de la tragedia de Chile.

